



Protección militar en el Índico hasta 2012

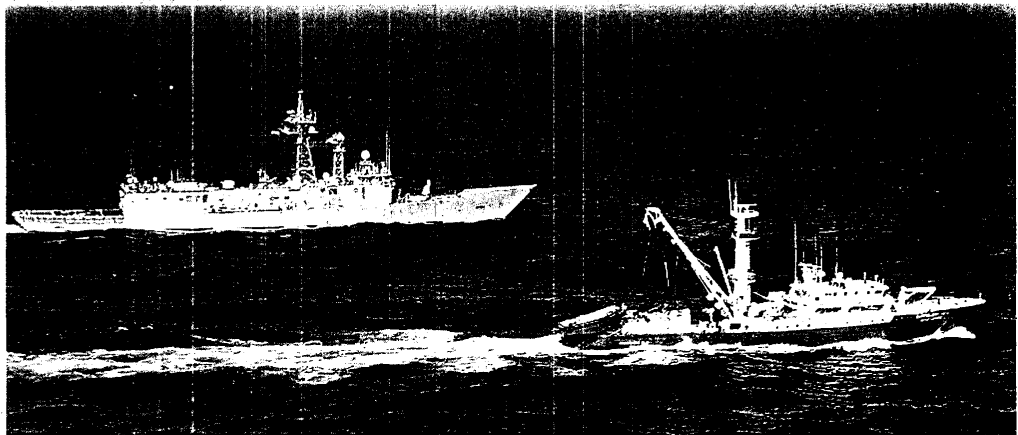
La 'operación Atalanta' entra en una fase clave con la ofensiva para controlar las bases piratas

La UE aprobará hoy la ampliación de la misión y los medios navales y aéreos del Ejército aumentarán a partir de septiembre

de MATEO BALÍN

MADRID. El Ejército seguirá al pie del cañón en la lucha contra la piratería en aguas somalíes. Los navíos de la Armada continuarán dando protección a los atuneros españoles al menos hasta 2012, una vez que la Unión Europea apruebe hoy mismo la ampliación del mandato de la 'operación Atalanta', según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa. La veintena de pesqueros que faenan en la zona mantendrán la seguridad privada a bordo para prevenir secuestros como el del 'Alakrana'. Además, contarán con el respaldo de los medios navales y aéreos que reforzarán la misión militar a partir de septiembre.

La nueva fase de 'Atalanta' será decisiva para devolver la seguridad marítima a una franja comercial estratégica. No sólo porque el Golfo de Adén, en el océano Índico, es el paso natural de los 16.000 mercantes que cada año circulan entre Asia



Una fragata escolta al atunero vasco 'Campolibre Alai' después de un intento de abordaje pirata en aguas somalíes. de EFE

y Europa, cuya carga supone un 20% del comercio mundial, sino para defender los intereses económicos españoles en la zona: el 40% de la demanda de la industria conservera nacional depende de los suministros de esta flota, que da empleo a cientos de marineros.

Con ese objeto, la misión aero-

naval de la UE estudia extender su radio de acción en aguas internacionales. En la actualidad controla un área similar al del mar Mediterráneo, pero dado el carácter expansivo de la piratería, con ataques registrados a más de 500 millas de la costa somalí, se pretende ampliar la operación hacia el este, más cer-

ca de la India que de África.

Con ello se busca proteger a los buques del programa mundial de alimentos de la ONU y garantizar la seguridad de los barcos comerciales «más vulnerables», entre los que se encuentran los atuneros, según el mando central de operaciones, que dirige hasta hoy el británico Pe-

ter Hudson. Otro de los retos de Atalanta es conseguir que los navíos se registren en el sistema de vigilancia y no salgan del área delimitada por los efectivos de la misión. En la actualidad los piratas tienen en su poder 17 barcos que permanecen amarrados en distintos puntos de la costa. En ellos se encuentran 357 tripulantes secuestrados.

IX Jornadas de Solidaridad con las Víctimas

"Verdad, Justicia y Memoria"

BERGARA / JUNIO

miércoles 15 martes - Donostia, sala Koldo Mitxelena
miércoles 16 miércoles - Vitoria-Gasteiz, Palacio Villaso
jueves 17 jueves - Bilbao, Hotel Nervión

Ordna/hora: 19:00

Gesto por la Paz

Con la colaboración de la Dirección de Atención a Víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco

Bases piratas

La decisión de ampliar la operación dos años más vendrá acompañada de un refuerzo de los medios navales para erradicar la piratería desde tierra. España aportará a 'Atalanta' un buque de guerra y una patrulla de altura para vigilar los puertos desde los que salen los esquifes y buques nodriza. También se mantendrá el avión de vigilancia P3-Orión.

En cualquier caso, no se desplegarán más militares de los inicialmente previstos (395) y se prevé que el coste de la misión se mantenga en torno a los cinco millones de euros mensuales, según Defensa. Los medios se desplegarán en la siguiente rotación: desde el 1 de septiembre hasta 20 de noviembre, coincidiendo con un previsible recrudescimiento de los ataques debido a la conclusión del periodo de monzones, lo que facilita el movimiento de los piratas.

A diferencia de la fragata 'Victoria', que navega ahora en el Índico, el buque de asalto anfibio 'Galicia' se considera más adecuado para vigilar los puertos que las fragatas, ya que no posee tantas capacidades de combate y si, en cambio, medios suficientes para supervisar todo lo que sale de la costa. Para ello cuenta con cuatro helicópteros y otras tantas lanchas motoras que facilitan las intervenciones rápidas.

Asimismo, el Ejército participa con 38 instructores en una misión en Uganda en la que tiene previsto formar a unos 2.000 policías somalíes que vigilarán los puertos piratas.



Naturaleza. Los visitantes se interesaron por los destinos. - usoz

El Salón de la Naturaleza atrajo a miles de personas

Unas doscientas personas participaron en la travesía por el Parque Natural de Aralar

AGURTZANE NUÑEZ

GANADEROS STÁN. El Salón de la Naturaleza y el Ocio atrajo el fin de semana a miles de personas en busca de destinos para las vacaciones. Propuestas variadas para salidas a lugares situados en plena naturaleza como las cuevas de Sara y Zugarramurdi, el valle del Nalón de Asturias o los parques naturales de Gipuzkoa.

Tanto la organización como los expositores valoraron positivamente esta segunda edición, que combinaba los 25 expositores en actividades para niños y mayores. «Los visitantes están muy interesados y conocen los destinos. Se

nota que están acostumbrados a este tipo de propuestas», señalaban en los stands. Desde la organización de Dv Multimedia explicaban que esta edición «ha venido a demostrar que el turismo de naturaleza encaja perfectamente con el turista guipuzcoano».

Ayer por la mañana se realizó una exitosa travesía por el Parque Natural de Aralar que salió del Parquetxe de Lizarrusti. En total participaron cerca de 200 personas, entre ellas el diputado general Markel Olano, en la travesía promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa y Kutxa.

Ganadores de los sorteos

El ganador de la jornada en Atapuerca con el equipo de investigación fue Gorka Odriozola. Las entradas para la aventura en la cueva El Soplao en Cantabria fueron para Marina López y Benezte Azpillaga.

Navíos de la Armada seguirán protegiendo a los atuneros que faenan en Somalia hasta 2012

La operación Atalanta entra en una fase decisiva con la ofensiva para controlar las bases piratas

MATEO BALÍN

EL EJÉRCITO seguirá al pie del cañón en la lucha contra la piratería en aguas somalíes. Los navíos de la Armada continuarán dando protección a los atuneros españoles al menos hasta 2012, una vez que la Unión Europea apruebe hoy la ampliación del mandato de la operación Atalanta, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa. La veintena de pesqueros que faenan en la zona mantendrán la seguridad privada abordo para prevenir secuestros como el del 'Alakrana'. Además, contarán con el respaldo de los medios navales y aéreos que reforzarán la misión militar a partir de septiembre.

La nueva fase de la operación Atalanta será decisiva para devolver la seguridad marítima a una franja comercial estratégica.

No sólo porque el Golfo de Adén, en el océano Índico, es el paso natural de los 16.000 mercantes que cada año circulan entre Asia y Europa, cuya carga supone un 20% del comercio mundial, sino para defender los intereses económicos españoles en la zona: el 40% de la demanda de la industria conservera nacional depende de los suministros de esta flota, que da empleo a cientos de marineros.

Con ese objeto, la misión aero-

naval de la UE estudia extender su radio de acción en aguas internacionales. En la actualidad controla un área similar al del mar Mediterráneo, pero dado el carácter expansivo de la piratería, con ataques registrados a más de 500 millas de la costa somalí, se pretende ampliar la operación hacia el Este, más cerca de India que de África.

Con ello se busca proteger a los buques del programa mundial de alimentos de la ONU y garantizar la seguridad de los barcos comerciales «más vulnerables», entre los que se encuentran los atuneros, según el mando central de operaciones, que dirige hasta este lunes el británico Peter Hudson. Otro de los retos de Atalanta es conseguir que los navíos se registren en el sistema de vigilancia y no salgan del área delimitada por los efectivos de la misión.

En la actualidad los piratas tienen en su poder 17 barcos que permanecen amarrados en distintos puntos de la costa, a la altura de Haradere, a unos 400 kilómetros al nordeste de la capital somalí, Mogadiscio. En ellos se encuentran 357 tripulantes secuestrados, entre los que se cuentan los 16 marineros del pesquero 'Sakoba', de armador gallego y bandera keniana, apresado en marzo y cuyo capitán es un ciudadano portugués con nacionalidad española y residente en Vigo.

DATOS

17

Son los barcos que los piratas tienen en su poder y que permanecen amarrados en puntos de la costa. En ellos se encuentran 357 tripulantes secuestrados.

395

Es el número de militares españoles desplegados en la zona. Esta misión tiene un coste de 5 millones de euros al mes.

En cualquier caso, no se desplegarán más militares de los inicialmente previstos (395) y se prevé que el coste de la misión se mantenga en torno a los cinco millones de euros mensuales, según el Ministerio de Defensa.

A diferencia de la fragata 'Victoria', que navega ahora en el Índico, el buque de asalto anfibio 'Galicia' se considera más adecuado para vigilar los puertos que las fragatas, ya que no posee tantas capacidades de combate y si, en cambio, medios suficientes para supervisar todo lo que sale de la costa.

Naves apresadas

Fue España quien promovió entre el resto de países europeos que conforman la misión la necesidad de ejercer una mayor presión sobre las bases que utilizan los piratas. Desde marzo hasta principios de junio dos patrulleros de la operación, uno de ellos español, navegaron frente a la costa somalí con resultados notables: se apresaron 117 embarcaciones de gran tamaño, nodrizas y esquifes, que hicieron posible desarticular medio centenar de bandadas armadas compuestas por unos 300 piratas.

Bases piratas

La decisión de ampliar la operación dos años más vendrá acompañada de un refuerzo de los medios navales para erradicar la piratería desde tierra. España aportará a Atalanta un buque de guerra y una patrullera de altura para vigilar los puertos desde los que salen los esquifes y buques nodriza que ponen en jaque la seguridad marítima mundial. También se mantendrá el avión de vigilancia P3-Orión, que en la actualidad se encuentra en la zona de operaciones.

El dilema de qué hacer con los detenidos

Los responsables de la operación Atalanta se encuentran con una losa de difícil solución: qué hacer con los detenidos. El incremento de la presión militar ha traído consigo el aumento del número de apresados (300 desde marzo) y los países con los

que se han firmado convenios de colaboración, Kenia y las Islas Seychelles, están al borde del colapso. Las autoridades kenianas amenazan con impedir la entrada de más piratas si no se dotan de más medios materiales y humanos para juzgar a los detenidos. La UE no tiene mucho margen de maniobra para dar una respuesta inmediata. Y la ONU presentará en tres meses un informe sobre las opciones para enjuiciar a los piratas detenidos.

IX Jornadas de Solidaridad con las Víctimas

"Verdad, Justicia y Memoria"

2010 / JUNIO

Asistencia al víctima y familia, Sala KIKO, Universidad del País Vasco, 4º planta, 48940 Leizor

Gesto por la Paz

Con la colaboración de la Dirección de Atención a Víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco



El ex director de Pastguren elude culpas en los vertidos al Cadagua

El antiguo jefe de Medio Ambiente en Vizcaya tacha los episodios contaminantes de «incompatibles con la vida» en el río

:: JOSÉ DOMÍNGUEZ

BILBAO. El Juzgado de lo Penal número 2 de Barakaldo celebró ayer la vista oral por un presunto delito ecológico contra el medio ambiente del que se responsabiliza al ex director de la papelera Pastguren de Zalla, Antxon Perea Ruiz de Larramendi. La titular de la sala deberá ahora determinar si acepta la petición de la Fiscalía de condenarle a dos años de prisión o, como aboga la defensa del acusado, firma su absolución al entender que no tuvo responsabilidad en los vertidos al río Cadagua objeto de enjuiciamiento, que se registraron entre los meses de agosto y septiembre de 2005. En opinión del propio inculcado, no le correspondía a él adoptar las medidas correctoras para evitar estas filtraciones al cauce fluvial; se trataba de una competencia de los «superiores» de la compañía, enfatizó.

La distancia entre ambas argumentaciones tiene su explicación en las diferentes interpretaciones realizadas sobre los episodios contaminantes. Entre ellas destacan la del ex jefe en Vizcaya de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Luis Fernando Picaza, que intervino en calidad de testigo para tachar las filtraciones de «incompatibles con la vida» en el río, y la del letrado del responsable de producción de la planta, que los redujo a «leves». Porque el hecho de que los vertidos se produjeron fue el único punto en común ayer en la sala. Junto a que el agua bajaba «amarrón y con burbujas» y procedía de un viejo vertedero.



Antxon Perea abandona los juzgados de Barakaldo tras celebrarse la vista. :: FERNANDO GÓMEZ

La Fiscalía entiende demostrado que el Ejecutivo autónomo impuso 21 medidas correctoras a este antiguo depósito de restos, «y apenas si se han tomado cuatro o cinco». «No se aisló el vaso para evitar que los lixiviados -líquidos procedentes de productos en descomposición y que en este caso están saturados de minerales como aluminio y hierro- desembocasen en un cauce fluvial», señaló la representante del Ministerio público, que remarcó la responsabilidad de Perea: «Era la persona que tenía el control de la producción y quien conocía la necesidad de adoptar medidas medio ambientales».

La fiscal subrayó que «se ha provocado un severo perjuicio al medio ambiente, ya que agentes de la Ertzaintza reconocen haber encontrado peces muertos». Y consideró que,

En suspensión de pagos tras lograr ayuda pública

El caso de Pastguren resulta, cuando menos, curioso. La firma encartada corre peligro de liquidación y ya el pasado octubre se declaró en suspensión de pagos, apenas cinco meses después de que la Diputación le concediese un aval por 2,5 millones de euros con los que pre-

tendía salvaguardar los 500 empleos -directos e inducidos- que dependen de la compañía. Precisamente la justificación de aquella medida «excepcional» sería, a juicio del abogado de Antxon Perea, la misma que habría permitido a la papelera seguir recibiendo ayudas públicas a pesar de no proceder al sellado del viejo vertedero. «El Gobierno vasco sabía que una inversión de este calado -se estimaba superior a 1,8 millones- podía arruinar a la compañía», señaló.

según los informes elaborados por el Seprona, en la actualidad el vertedero seguiría filtrando elementos «tóxicos» al río como lo hacía en 2006, siete meses después de los hechos enjuiciados.

El abogado defensor reconoció el problema del vertedero, pero apuntó que no podía achacarse al director de producción de Pastguren «porque había superiores competentes para decidir una inversión millonaria en mejoras que, de haberse efectuado, podrían haber llevado a la empresa a la quiebra».

Nuevo vertedero

Según explicó, la firma cumplió con las obligaciones comprometidas con el Gobierno vasco cuando inició su andadura en 1999. «Construyó un nuevo vertedero, que es el que ha utilizado estos años y que tiene una tubería directa para trasladar los lixiviados a la fábrica, realizar un tratamiento primario y luego enviarlos a la depuradora de aguas de Güeñes», precisó. El viejo, a su juicio, había quedado abandonado, aunque varios agentes aseguraron durante la vista haber encontrado en 2005 cenizas de la compañía «de reciente depósito».

La otra gran cuestión a dirimir por la juez que dictaminará el caso es la propia afición de la evacuación de lixiviados al arroyo La Jara, afluente del Cadagua. La defensa insistió en que no ha quedado probada la contaminación real, «porque no se analizó la cantidad ni el tiempo que duraron los vertidos, así como tampoco el volumen de agua que tenía entonces el cauce». Y remarcó que, según el propio informe del Seprona, apenas un centenar de metros más abajo, ya en el propio Cadagua, «no había signos de aguas afectadas». «Por todo ello, procede la absolución de mi representado y el abandono de la vía penal», que, en todo caso, debe limitarse a una sanción administrativa a la empresa por los vertidos realizados», resumió.

El ex director de Ihobe declara como imputado por un delito ecológico

:: J. G.

BILBAO. Txetxu Aurrekoetxea, ex director de Ihobe, sociedad pública dependiente del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, declarará mañana ante un juez de Barakaldo como imputado por un presunto delito ecológico cometido durante el desmantelamiento de la fábrica Plásticos de Lutzana. El magistrado interrogará también a un representante de la compañía, que cerró sus instalaciones de la localidad fabril en 2004.

El ex alto cargo de la Administración autonómica fue imputado hace

un mes en la causa, abierta a raíz de una denuncia formulada por el grupo ecologista Lur Maitea, que lleva más de una década de lucha en los tribunales con diversos procesos relacionados con la contaminación por lindane.

En un auto fechado el pasado 5 de mayo, el magistrado entiende que existen indicios de que se ha podido cometer un delito durante los trabajos de limpieza de los terrenos. El juez presta atención a unos informes elaborados por el Seprona -la unidad de Medio Ambiente de la Guardia Civil- que alertan de la presencia de residuos peligrosos.

IX Jornadas de
Solidaridad con
las Víctimas

"Verdad, Justicia y Memoria"

Ostizuna, 27 de junio - Bilbao, 28 de junio
Ostizuna, 29 de junio

Gesto por la Paz

Con la colaboración de la Dirección de Atención a Víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco



Rubalcaba reprocha al PP que cuestione la lucha contra ETA «cuando mejor va»

El Gobierno Vasco mantiene que con la «política de tolerancia cero» el final de la organización terrorista «está más cerca»

● DV Y AGENCIAS

SAN SEBASTIÁN El malestar en el Gobierno por los ataques más o menos velados del Partido Popular a la lucha antiterrorista es creciente. El acto de este lunes en el que los ex ministros del Interior de José María Aznar, con el ex presidente a la cabeza, alertaron de supuestas «operaciones de distracción» o, incluso, sobre «el juego temerario» del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, ha terminado de encender los ánimos en el Ministerio del Interior.

Su actual titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, que horas antes no podía disimular en privado su monumental enfado, se refugió ayer en la ironía para contestar a las insinuaciones que Aznar, Mariano Rajoy, Jaime Mayor y Ángel Acebes lanzaron durante la presentación del libro de la FAES 'La Política Antiterrorista para la derrota de ETA', del diputado del PP Ignacio Cosidó. «Me llama la atención en este caso, otra vez más, que cuanto mejor vaya la lucha antiterrorista más vo-

ces del PP se sumen a cuestionarla. Me llama la atención y no le encuentro una razón fácil de explicar... O sí», apuntó con sorna.

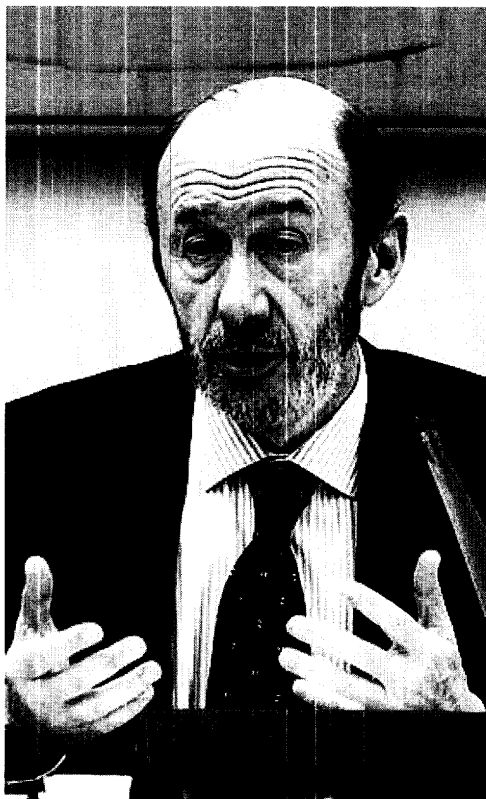
Rubalcaba no quiso ahondar en la polémica, y reiteró que «no es cuestión de creer o no creer» que la izquierda abertzale pueda participar en los comicios. Batasuna «sabe lo que tiene que hacer». O lo que es lo mismo, seguirá «ilegalizada» en tanto en cuanto «no rompa con ETA fehacientemente o mientras ETA no le deje fehacientemente».

Mientras, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, reafirmó ayer la voluntad del Ejecutivo autonómico de seguir combatiendo a ETA con la política de tolerancia cero y con la coordinación policial con otras fuerzas de seguridad. Además, opinó que el final de la organización terrorista «está más cerca» gracias a los «buenos» resultados de esta estrategia.

El papel de Eguiguren

En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntada por el llamamiento del presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, al lehendakari a liderar un eventual escenario de final de la violencia, Mendia recordó que el presidente autonómico vasco «lidera todas las políticas del Gobierno Vasco».

Preguntada por si las palabras de



El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. ● EFE

Eguiguren han generado malestar en el seno del Gobierno Vasco, lo negó y dijo que sus reflexiones no han sido comentadas en el Consejo de Gobierno.

Desde el PP, su presidente en el País Vasco, Antonio Basagoiti, consideró ayer que Batasuna, «haga lo

que haga» y «diga lo que diga», no debería presentarse a los próximos comicios «bajo ningún concepto» para poder comprobar si hay «una nueva farsa». «Si quieren separarse que lo hagan, pero tienen cuatro años para demostrar que no era una táctica para colarse en las elec-

El ministro destaca que «no es cuestión de creer o no creer, Batasuna sabe lo que tiene que hacer»

Basagoiti mantiene que la izquierda abertzale no debe ir a las elecciones «diga lo que diga»

ciones y seguir con su proyecto fanático», aseguró. «Aquí lo necesario sería que condenase el terrorismo de manera firme, que además condenase todos los atentados de ETA desde el primero hasta el último, la historia de ETA, y que asumiese el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto», agregó.

También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió al Ejecutivo de que si Batasuna u otra «marca de ETA» consigue «colarse» en las elecciones de 2011, porque «así lo permite el Gobierno», ello supondría «romper» el pacto antiterrorista. No obstante, reconoció que tanto el Ejecutivo central como el vasco han dado «su palabra» de que no hay contactos. «La prueba del nueve», dijo, serán los próximos comicios. En declaraciones a Punto Radio, anunció que su partido dejará de apoyar al Gobierno de Patxi López si hay «constancia absoluta» de que Zapatero negocia con ETA.

«Va a ser muy difícil que los victimarios lleguen a reconocer el daño causado»

Galo Bilbao Profesor de Ética en la Universidad de Deusto

Considera que la presencia de víctimas en las aulas concreta los derechos de verdad, justicia y memoria

● ÁLVARO VICENTE

avicente@diariovasco.com

SAN SEBASTIÁN Galo Bilbao ofreció ayer una conferencia en el Koldo Mitxelena de San Sebastián bajo el título 'Verdad, justicia y memoria', dentro de las jornadas de solidaridad con las víctimas organizadas por Gesto por la Paz. Bilbao es licenciado en Filosofía y doctor en Teolo-

gía, además de profesor de Ética en la Universidad de Deusto.

—¿Qué están reivindicando las víctimas cuando piden verdad, justicia y memoria?

—A grandes rasgos la verdad remite al pasado, a aclarar los elementos que están sin esclarecer; la justicia significa reconocerlas, y la memoria, que tengan la oportunidad de incorporar a la realidad colectiva el relato de su experiencia.

—Entiendo que esta reivindicación va más allá de que ETA tome una decisión u otra.

—Hay que profundizar en la verdad sobre el pasado, la justicia actual y la memoria respecto al futuro sin estar

pendiente a ningún momento final. La mera situación de conflicto de violencia que generan las víctimas demanda estas tres obligaciones sociales. Luego, si hacemos bien las cosas, habremos avanzado en una dirección en la que el escenario en el que nos encontremos en ese día después resulte más manejable, más adecuado y con menos riesgos a cometer. Es lo que deseo. El shock, espero que positivo, que pueda suponer en la sociedad vasca el anuncio definitivo del abandono de las armas o su desaparición nos puede hacer ir demasiado rápido sin haber cubierto las etapas previas. En ese 'ir demasiado rápido' corremos el riesgo de ocultar la

verdad, de no hacer suficiente justicia o de seleccionar memorias que nos puedan resultar más o menos interesantes. No vale el pasar página.

—Pero el ritmo social no es el mismo que el de las víctimas.

—Lo mismo que el ritmo de las víctimas no es el mismo que el de los victimarios. Va a ser muy difícil que los propios victimarios lleguen a reconocer el daño causado y lo moralmente inadecuado de su decisión. En cualquier caso hará falta tiempo para que se produzca esa situación.

—¿En qué medida ayuda el hecho de que las víctimas relaten su experiencia en las aulas?

—Cubre algunos de los elementos de verdad, justicia y memoria. En la medida en la que la víctima tiene capacidad de contar las cosas como las ha vivido aporta una perspectiva que no teníamos. El que las víctimas estén en las aulas no es el acto que culmina la justicia pero sí es una manera de justicia. En la medida en que un referente básico de la sociedad, el del terreno educativo, hace un reconocimiento a ese que tiene la oportunidad de contar y narrar su propia

realidad, a alguien que de alguna forma recupera su identidad, eso es un acto de justicia. La presencia de víctimas no agota pero complementa y concreta esos derechos de verdad, justicia y memoria o esas obligaciones respecto de las víctimas.

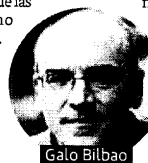
—Pero no va a ser fácil su aplicación.

—En nuestra vida social estamos acostumbrados a hacer cosas que tienen riesgos y a pesar de todo lo seguimos haciendo. Evidentemente la presencia de víctimas en las aulas tiene sus riesgos,

pero habrá que cuidar las condiciones y generar los elementos que dificultan la aparición de esos riesgos.

—¿Y si todavía no se acepta el testimonio directo o por medios audiovisuales?

—Si se percibe un ambiente inadecuado no hay que forzar las situaciones pero sí aprovechar las circunstancias para introducir unos elementos de debate, de diálogo, acerca de esa problemática. Incluso en aquellas circunstancias en las que no sea posible hacerlo, no hay que desaprovechar la ocasión para convertirlo en una acción educativa. Siempre será un avance.



Galo Bilbao